

JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN CANTABRIA

MARCOS GÓMEZ PUENTE

Catedrático de Derecho Administrativo

Universidad de Cantabria

En el período cubierto por esta crónica y por lo que respecta a la región cántabra, se ha tenido conocimiento de las siguientes sentencias de interés ambiental:

— SAN de 4 de febrero de 2013 (canon de vertidos). Estima parcialmente un recurso contra la liquidación del canon por control de vertidos no autorizados dirigida a la mercantil SNIACE. El motivo estimado es el referido a la ilegalidad del artículo 292.b del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (aprobado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por cuanto establece que en “todo caso se aplicará el coeficiente 4 de mayoración”, porque contradice lo dispuesto en el artículo 113.3 de la Ley de Aguas, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio), conforme al cual el importe del canon debe calcularse multiplicando el precio básico por metro cúbico por un coeficiente de mayoración o minoración que se establecerá reglamentariamente en función de la naturaleza, las características y el grado de contaminación del vertido, así como en función de la calidad ambiental del medio físico en que se vierte. Así, mientras que la Ley de Aguas prevé que el coeficiente de mayoración varíe en función de las circunstancias apuntadas, la disposición reglamentaria impone un mismo coeficiente en todos los casos, con lo que incurre en un automatismo que vulnera el aludido precepto legal (puede verse, en el mismo sentido, la STS de 7 de marzo de 2012).

— SAN de 22 de mayo de 2013 (concesión marítimo-terrestre). La Sala reconoce la legitimación procesal de una asociación ecologista (ARCA) y estima parcialmente el recurso interpuesto contra el acto por el que se otorgó una concesión administrativa para la ocupación de dominio público marítimo-terrestre con cultivos marinos en la ría de Tina Menor, declarando nulo dicho acto porque (i) no se realizó la preceptiva evaluación de la repercusión del proyecto sobre el LIC de las Rías Occidentales y Duna de Oyambre, infringiendo lo dispuesto en el artículo 6.3 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, en relación con el artículo 146.6 del Reglamento de Costas; (ii) no se incluyó en el proyecto el estudio básico de la dinámica del litoral exigido por el Reglamento de Costas; y (iii) no se incluyó el estudio económico-financiero exigido por los artículos 87 y 89 del Reglamento de Costas. Vicios formales, todos esenciales, por los que quedó viciado de nulidad el acto impugnado y se procede a su anulación, sin estimar, sin embargo, la pretensión de la recurrente de que se repusieran los terrenos a su estado original, pues para determinar este debería seguirse antes otro procedimiento.

— STS de 28 de febrero de 2013 (tendido de energía eléctrica). El TS casa una sentencia del TSJ de Cantabria que había confirmado una resolución de la Administración regional por la que se negaba a revisar el procedimiento de expropiación forzosa para la ejecución de una línea de transporte de energía eléctrica. Entiende la Sala que se tramitó correctamente la información pública, pero que, habiéndose detectado posteriormente un error material cuya corrección implicaba una carga o afectación para la finca del recurrente, debió ofrecérsele a este trámite de defensa, aunque no fuera necesario repetir el trámite de información pública por no afectar dicha corrección al proyecto en su conjunto.

— STS de 25 de abril de 2013 (evaluación ambiental estratégica). La Sala confirma la anulación de un plan parcial sobre suelo urbanizable no programado porque no fue sometido a evaluación ambiental estratégica, rechazando que esta fuera innecesaria en razón del momento de la aprobación del plan, ya que esta tuvo lugar cuando ya estaban vigentes tanto la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, como la Ley de Cantabria 17/2006, de 17 de diciembre, de Control Ambiental Integrado.

Al cierre de la presente crónica se ha tenido noticia de que ha recaído sentencia en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ARCA, Ecologistas en Acción, Cantabria Nuestra y la Asociación para la Conservación de la Arquitectura Tradicional en el Litoral de Cantabria contra la modificación núm. 9 del Plan Especial del Puerto, aprobada por el Gobierno de Cantabria en abril de 2012 con el fin de posibilitar la construcción del Centro Botín en Santander. Se dará cuenta detallada del contenido de esta sentencia en la siguiente crónica.